

Este es el supuesto que justifica la presente Ley. Es de todos conocido el enorme volumen de daños que, en los bienes públicos de infraestructura y equipamiento comunitario y en las propiedades privadas, ha sufrido la Región de Murcia.

La actuación coordinada de las distintas Administraciones públicas se ha articulado, de modo coherente, a través del Real Decreto 4/1987, de 13 de noviembre. Al solicitar de la Asamblea Regional la autorización de unos créditos extraordinarios para la financiación de la reparación de los daños causados en los bienes públicos regionales, se somete a su aprobación un sistema de articulación entre las subvenciones y créditos que la Administración Central ha previsto y las inversiones a que la Comunidad Autónoma viene obligada.

Conviene subrayar que las líneas de financiación privilegiadas, con las que se atenderá a los créditos extraordinarios que esta Ley autoriza, constituyen una muestra de cooperación entre los distintos poderes públicos y presentan ventajas importantes para la Comunidad Autónoma.

El carácter ampliable del crédito extraordinario con las garantías y reservas que en la Ley se contienen, se justifica por la gravedad de los daños que hace imposible determinar, desde ahora, todos los producidos de manera indirecta que todavía no se han puesto de manifiesto.

Artículo 1

a) Se concede un crédito extraordinario en la Sección 14, Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, en las partidas y con los importes que se detallan:

14.03.513C.66 «Reparación red viaria».

Concepto 667 «Bienes destinado al uso general»: 1.838.500.000 pesetas.

14.04.431A.66 «Reparación daños en viviendas».

Concepto 662 «Edificios y otras construcciones»: 277.393.860 pesetas.

14.06.512D.68 «Reparación infraestructura hidráulica zonas catastróficas».

Concepto 687 «Bienes destinados al uso general»: 89.513.837 pesetas.

b) Se concede un crédito extraordinario de 27.000.000 de pesetas en la Sección 14, en la partida 14.06.512D.69 «Reparación infraestructura hidráulica zonas no catastróficas», concepto 697 «Bienes destinados al uso general».

c) Se concede un crédito extraordinario de 35.000.000 de pesetas en la Sección 20, Consejería de Bienestar Social, en la partida 20.01.311A.760 «Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar».

d) Asimismo, se concede un crédito extraordinario en la Sección 17, Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, en las partidas e importes que se detallan:

17.03.714D.770 «Para inversiones de reposición en explotaciones afectadas por inundaciones»: 100.000.000 de pesetas.

17.05.531A.66 «Reparación infraestructura rural zonas no catastróficas».

Concepto 667 «Bienes destinados al uso general»: 280.000.000 de pesetas.

Artículo 2

Las dotaciones incluidas en el apartado a) del artículo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 4/1987, de 13 de noviembre, se financiarán:

a) Mediante subvención del Estado en la cuantía que posibilite el Real Decreto Ley 4/1987, de 13 de noviembre.

b) Mediante la formalización de un préstamo por la cantidad restante con el Banco de Crédito Local de España en

las condiciones establecidas en el Real Decreto Ley anteriormente citado, o bien de otra operación de endeudamiento en el mercado financiero.

Artículo 3

Los créditos que se conceden en los apartados b), c) y d) del artículo 1.º, serán financiados mediante la formalización de préstamos concertados en el mercado financiero por la cuantía de su dotación y en las condiciones vigentes en el mercado.

Artículo 4

Se faculta al Consejo de Gobierno para ampliar los créditos autorizados en el apartado a) del artículo 1.º o habilitar, en su caso, nuevos créditos siempre que se destinen a financiar las inversiones necesarias para la reparación de los daños causados por las inundaciones en la Región de Murcia el pasado mes de noviembre. La financiación de las ampliaciones o habilitaciones de crédito, previstas en el párrafo anterior, se realizará de la forma señalada en el artículo 2.º de esta Ley.

DISPOSICION FINAL

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Murcia, 28 de junio de 1988.—El Presidente, **Carlos Collado Mena**.

Consejería de Administración Pública e Interior

6235 ORDEN de 22 de junio de 1988 de la Consejería de Administración Pública e Interior por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la Orden dictada por la Consejería de Administración Pública e Interior relativa al recurso de reposición interpuesto por doña Francisca García Mira.

Se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la Orden dictada por la Consejería de Administración Pública e Interior, el 15 de junio de 1988, relativa al recurso de reposición interpuesto por doña Francisca García Mira, cuya referencia es la siguiente:

En el recurso de reposición interpuesto por doña Francisca García Mira, contra Orden de 31 de mayo de 1988, («Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 128, de 4 de junio de 1988) por la que se rectifican errores y omisiones advertidos en la Orden de 24 de mayo de 1988, en el que solicita se resuelva disponer la corrección del error producido al publicarse como vacante la plaza de Jefe de Sección de Planificación y Actividad Financiera, la Consejería de Administración Pública e Interior ha dictado Orden cuya disposición es del siguiente tenor literal:

“Dispongo: Estimar el recurso de reposición interpuesto por doña Francisca García Mira, y en consecuencia, proceder a declarar nula la Orden de 24 de mayo de 1988 en relación con la convocatoria de la plaza Jefe de Planificación y Actividad Financiera.

Cabe interponer contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de su notificación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Murcia de la Audiencia Territorial de Albacete, al amparo de lo dispuesto en el artículo 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Murcia, 22 de junio de 1988.—El Consejero de Administración Pública e Interior, **Rafael María Egea Martínez**.